

A.—Antonio D. Treviño.—A.—J. Francisco Campos.

Es copia que certifico. Saltillo, á 23 de Setiembre de 1874.—Lic. Mariano Sanchez Peña.—A.—Antonio D. Treviño.—A.—J. Francisco Campos.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 24 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Coahuila, por Ponciano Zamora, contra el presidente municipal del Saltillo que lo condenó á muerte como reo de robo y homicidio en despoblado, con cuyo acto cree el quejoso vulneradas en su persona las garantías á que se refieren los arts. 14, 16 y 21 de la constitucion general; y Considerando: que en el expediente aparece que el presidente municipal del Saltillo, procedió dentro de la órbita de sus facultades sin vulnerar las garantías invocadas; de conformidad con lo que dispone el art. 101 de la constitucion general, se decreta: que se confirma por sus propios fundamentos, la sentencia pronunciada respecto de este juicio, á 19 de Setiembre último, por el juzgado de Distrito de Coahuila que declaró: que la justicia de la Union no ampara ni protege al reo Ponciano Zamora, contra la sentencia de muerte pronunciada el 17 de Enero del corriente año, por el presidente del ayuntamiento de esta ciudad.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados- Unidos Mexicanos y firmaron.—José M. Iglesias.—M. Auza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Luis Velazquez.—

M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 15 de 1874.—Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Coahuila, por Gregorio Castillo, á nombre de su hijo Cástulo Castillo, contra el presidente municipal del Saltillo, que condenó á este á la última pena.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez:

El promotor fiscal dice: que el C. Gregorio del Castillo solicita el amparo de la Justicia de la Union para su hijo Cástulo, condenado á sufrir la pena de muerte por el Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad, conforme á la ley de saltadores. Se funda la solicitud, en que no existiendo una prueba perfecta del delito que se persigue, la ley no es exactamente aplicable y se viola por este motivo el art. 14 de la Constitucion federal. Este razonamiento no es fundado ni justifica la procedencia del recurso de amparo.

La exactitud de la aplicacion de que habla aquel artículo, se contrae á la naturaleza del delito, es decir, exige que este sea el mismo que esté definido en la ley, mas de ningun modo puede referirse á la comprobacion mas ó menos perfecta de los hechos que la constituyen.

Esta interpretacion está admitida en la práctica de los tribunales federales, y fundada en diversas ejecutorias que van formando nuestra jurisprudencia federal.

Ademas de esto, el valor legal de las pruebas que existen en el proceso y su eficacia,

han sido apreciadas por la autoridad que designa la ley, y la calificación que de ellas se hizo no está sujeta á la revisión de este Juzgado. La Suprema Corte de Justicia, textualmente ha consignado en su Ejecutoria de 8 de Enero, que el "Exámen circunstanciado de la mayor ó menor plenitud de las pruebas, es de la exclusiva competencia del Juez del delito," que en el presente caso lo ha sido el C. Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad.

Por tanto, ni ha habido inexactitud en la aplicación de la ley, ni la debilidad de las pruebas del delito puede fundar la procedencia del recurso de amparo que se solicita. El que lleva la voz, á pesar de sus sentimientos humanitarios, tiene que cumplir con su deber pidiendo al Juzgado se sirva declarar que no procede el amparo, ni es de decretarse en derecho.

Saltillo, Julio 31 de 1874.—*E. Horcasitas*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico.

Saltillo, Setiembre 23 de 1874.—*Lic. Mariano Sanchez Ruiz*.—*A.*—*Bernardo Larelo*.—*A.*—*Sixto Zepeda*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Saltillo, Setiembre 22 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Gregorio Castillo, en nombre y representación de su hijo Cástulo, contra el ciudadano presidente del Ayuntamiento de esta ciudad, por haber violado en la persona de su mencionado hijo la garantía que le otorga el art. 14 de la Constitución general de la República, en virtud de no haberle aplicado exactamente la pena de muerte á que fué condenado por considerársele comprendido en el delito de asalto cometido en el punto de los «Callejones», el informe con justificación rendido por el gobierno del Estado: el pedimento fiscal y todo lo demás que de autos consta, debió tenerse presente y ver convino, y

Considerando 1º que la apreciación de las

pruebas de un proceso corresponde única y exclusivamente al juez que conoce en el Ejecutivo de la Suprema Corte de Justicia, fecha 8 de Enero del corriente año. 2º Que el art. 14 previene expresamente, que *nadie sea juzgado y sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él por el tribunal que haya establecido la ley*. 3º El reo Cástulo Castillo, ha sido juzgado y condenado como saltador á sufrir la pena de muerte despues de hecha por la autoridad competente, la apreciación legal de las pruebas del proceso. 4º Que habiendo obrado el ciudadano presidente del Ayuntamiento, de entera conformidad con las prescripciones del referido art. 14, esto es, habiendo juzgado á Cástulo Castillo conforme á una ley anterior expedida para corregir los delitos de asalto y plagio y aplicada al hecho de asalto la pena que la ley señala para esta clase de delitos, ha obrado dentro del círculo de la Constitución y de la ley, y por consiguiente no puede decirse que haya cometido la violación que pretende el quejoso, por haber dado á las pruebas del proceso mayor fuerza de la que segun las leyes tenían en sí segun su juicio. 5º Que por las constancias que arroja la causa instruida á Cástulo Castillo, aparece justificado que él fué uno de los autores del delito de asalto por el que se le procesó.

Por todo lo expuesto y con fundamento en los artículos 14, 101 y 102 de la Constitución general de la República, se declara: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al reo Cástulo Castillo, contra la sentencia de muerte pronunciada en su contra por el ciudadano presidente del Ayuntamiento de esta ciudad. Notifíquese. Sáquense las copias de estilo para su publicación y remítase este juicio á la Suprema Corte de Justicia para su revisión. Así definitivamente juzgando lo decretó, mandó y firmó el ciudadano juez de Distrito del Estado, actuando con testigos de asistencia: damos fé.—*Lic. Mariano Sanchez Peña*.

—A.—Antonio D. Treviño.—A.—J. Francisco Campos.

Es copia de su original que certifico. Saltillo, Setiembre 24 de 1874.—Lic. Mariano Sanchez Peña.—A.—J. Francisco Campos.—A.—Antonio D. Treviño.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 24 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por Gregorio Castillo, á nombre de su hijo Cástulo Castillo contra el Presidente Municipal del Saltillo que condenó a este á la última pena como reo de robo y homicidio en despoblado; con cuyo acto cree el quejoso vulnerada en la persona de su hijo, la garantía á que se refiere el art. 14 de la Constitución general; y considerando: que en el expediente aparece que el Presidente Municipal del Saltillo procedió dentro de la órbita de sus facultades, sin vulnerar la garantía invocada; de conformidad con lo que dispone el art. 101 de la Constitución general, se decreta: que se confirma por sus propios fundamentos la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 22 de Setiembre último por el juez de Distrito de Coahuila, que declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al reo Cástulo Castillo contra la sentencia de muerte pronunciada en su contra por el C. Presidente del Ayuntamiento de esa ciudad.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision; acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—José M. Iglesias.—M. Auza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—Luis Velazquez.—

TOMO VII.—PARTE II

M. Zavala.—José García Ramires.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico.—México, Diciembre 10 de 1874.—Enrique Landa.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Coahuila por los reos Bonifacio Ibarra y Crescencio Núñez, contra el fallo del jefe político de Durango que los juzgó como saltadores condenándolos á la pena de muerte.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El ciudadano jefe de hacienda del Estado encargado de llevar la voz fiscal dice: que los reos Bonifacio Ibarra y Crescencio Núñez, aprovechándose de los términos en que la jefatura política expidió su decreto de 17 de Agosto último, han promovido este juicio de amparo; sosteniendo que en ese decreto se les hizo saber que los juzgaban conforme á la ley de plagarios vigente, y que se trataba de sentenciarlos el 29 del mismo mes, en cuya fecha interpusieron el presente recurso, quejándose de que no se les concedieron para presentar sus pruebas y defensas, los quince días que previene en su art. 3º la ley relativa de 10 de Abril del corriente año.

Es cierto que el citado artículo dice en lo conducente: "El término del juicio no podrá exceder en ningún caso del plazo perentorio é improrogable de 15 días, durante los cuales podrán los procesados presentar las pruebas y defensas que á su derecho convengan." Pero así también es cierto, que los peticionarios no ignoraban antes del día 17 la causa porque estaban juzgándose. No ignoraban que habian sido aprehendidos por saltadores y plagarios. No igno-